

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM**

**LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA DE
TRANSIÇÃO I**

L514

Legislação, Direitos Humanos e Justiça de Transição I [Recurso eletrônico on-line]
organização I Congresso Internacional de Justiça e Memória (I CIJUM): Universidade de
Itaúna - Itaúna;

Coordenadores: Giovanni Vinicius Caetano e Silva, Farissa Maria Drumond Chequer
Queiróz e Filipe Augusto Silva - Itaúna: Universidade de Itaúna, 2023.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-5648-922-3

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Enfrentando o legado das ditaduras e governos de matriz autoritária.

1. Direito. 2. Justiça. 3. Memória. I. I Congresso Internacional de Justiça e Memória
(1:2024 : Itaúna, MG).

CDU: 34

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM

LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO I

Apresentação

Recientemente se llevó a cabo el importante evento presencial brasiliano, Congreso Internacional de Justicia y Memoria (I CIJUM), esto es, el 02 de diciembre de 2023 y que tuvo como temática: “Enfrentando el legado de dictaduras y gobiernos autoritarios”. El mismo que fue organizado por la Universidad de Itaúna (UIT), a través de su Programa de Pos- graduación en Derecho, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación y Pos- graduación en Derecho (CONPEDI).

Es de resaltar plausiblemente la temática elegida para el mismo. Ello, en tanto que, si no se tiene memoria de lo ocurrido o no se aprende de lo vivido, lo que corresponde penosamente es, repetir los hechos acaecidos, tantas veces, hasta cuando se haya asimilado las enseñanzas dejadas por la historia.

Por ello, la historia es la ciencia que se encarga del estudio de los eventos y procesos del pasado y presente. Para esto, hace una recopilación de documentos o pruebas de los fenómenos sociales y culturales que permiten su reconstrucción y su análisis. Su objetivo principal es estudiar, indagar, comprender e interpretar lo que ha ocurrido en la humanidad, para así entender y aprender de esos hechos y por supuesto no repetir los errores que han ocurrido.

Pero quizá el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es que esta materia ayuda a pensar. Las vueltas que han dado las sociedades desde la prehistoria hasta la actualidad han profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder para imponer y conocer cuáles han sido esos caminos nos ayuda a consolidar nuestro propio criterio sobre la sociedad. Algunos teóricos señalan que la historia es como una rueda de molino que siempre vuelve. Conocer nuestra identidad como personas y sociedades y encaminar nuestros pensamientos hacia esa diversidad son las claves para forjarnos un futuro mejor.

Conocer la historia no nos hará infalibles, ni evitará la reiteración de errores, ni nos anticipará el mañana; pero gracias al estudio de la historia podremos pensar críticamente nuestro mundo y tendremos en nuestras manos las herramientas para entender las raíces de los procesos actuales y los mapas para orientarnos en las incertidumbres del futuro. Desatender la historia

no nos libra de ella, simplemente regala el control. Las personas somos seres narrativos e históricos; ambos rasgos son intrínsecos a nuestra identidad.

Al hablar de historia, resulta imperativo dejar constancia, que, para entender y aprender de la misma, es preciso atender una mirada trífrente. Esto es, que es necesario abordarla desde el enfoque del pasado, del presente y del futuro.

Así, el presente evento se sitúa en el enfoque de lo ocurrido en el pasado, a efectos de aprender de ello y como consecuencia, nutrirse del aprendizaje respectivo. Dicho de manera específica: entender la historia, para no solamente no olvidarla, sino que, además, para garantizar que las dictaduras y gobiernos autoritarios, no vuelvan a repetirse o tener un mejor desempeño en rol fiscalizador de la población al gobierno de turno. Para finalmente, lograr o garantizar el abrace de la justicia.

Y es que la universidad, no solamente tiene por quintaescencia, la investigación y retribución de ciencia y tecnología hacia la población (además, de constituirse en un derecho fundamental, reconocido en la Constitución Política). Entonces, la universidad debe generar conciencia, análisis, para luego de ello, ejercer de manera inmejorable el control del Estado, a través del acertado ejercicio de los derechos fundamentales, a la transparencia y acceso a la información pública, a la rendición de cuentas, a no deber obediencia a un gobierno usurpador, a la protesta ciudadana pacífica sin armas, por citar solo algunos.

Ello, sin dejar de lado la trascendencia del método histórico en la investigación. Y es que sin investigación no existe vida universitaria, equivaldría a una estafa, a “jugar a la universidad”.

El método histórico es propio de la investigación histórica y con él se pretende, a partir del estudio y análisis de hechos históricos, encontrar patrones que puedan dar explicación o servir para predecir hechos actuales (pero nunca a corto plazo). Y se caracteriza por: i) Inexistencia de un único método histórico, ii) No genera predicciones a corto plazo, iii) Busca no solo contar la manera en que sucedieron los acontecimientos del pasado, también se centra en establecer hipótesis sobre por qué llegaron a suceder, lo que hace que muchos no consideren la historia como una ciencia al uso, ya que no establece absolutos, iv) Sus investigaciones se basan en fuentes de la época ya sean libros, documentos, diarios, enseres personales, v) Deben contrastarse las fuentes utilizadas y cerciorarse de que son realmente veraces.

Por ello, la historia se escribe constantemente a medida que vamos encontrando nuevos hallazgos. Hallazgos de los que debe quedar constancia, como expone el escritor Oscar

Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Y Posiblemente, la razón de mayor peso para la importancia de la historia sea que, al conocerla y estudiarla, nos permite aprender a pensar y razonar por nuestra cuenta. Mientras más conocemos qué sucedió antes de nuestro tiempo, y cómo hemos llegado a la actualidad, con más argumentos contaremos para llegar a conclusiones propias con base en ello. Una habilidad que sin duda constituye un aprendizaje en diferentes aspectos de nuestras vidas.

En ese orden de ideas, deviene en imprescindible conocer, analizar la historia, para poder defender la democracia, el libre desarrollo de los pueblos, por ejemplo. Aunque, si bien es cierto, no necesariamente es lo mejor, es lo mejor que tenemos. Y los problemas de la democracia, deben ser enfrentados con más y mayor democracia.

Lo señalado no resulta ser de aplicación sencilla o menor, puesto, que por filosofía se sabe que el ser humano es marcadamente anti democrático, en vista de su naturaleza jerárquica y territorial.

En consecuencia, la relevancia que reviste el presente Congreso Internacional, cobra mayores ribetes y trascendencia.

Amerita, resaltar el rotundo éxito y tremenda acogida, por parte de conferencistas y asistentes. Es de apostrofar también, la masiva recepción de los casi 200 capítulos que formarán parte de los e- Book respectivos.

Por ello, felicitamos muy de sobremanera a los señores miembros de la Coordinación General, Profesores Dres. Faiçal David Freire Chequer, Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais, Fabrício Veiga Costa, Deilton Ribeiro Brasil y Secretaria Executiva Dres. Caio Augusto Souza Lara y Wilson de Freitas Monteiro.

Así también, expreso mi profundo agradecimiento a mi amigo, el renocido jurista, Dr. Deilton Ribeiro Brasil, por haberme extendido la generosa invitación a elaborar las presentes líneas, a modo de presentación.

Finalmente, hacemos votos, a efectos que se continúen llevando a cabo eventos de tan gran trascendencia, como el bajo comentario, con el objetivo de fomentar la investigación, mejorar el sentido crítico de los estudiantes, procurar mejores destinos y plausible evolución de los pueblos, evitar nuevas dictaduras, gobiernos autoritarios, entre otros; sobre todo, en estos tiempos en los que la corrupción se ha convertido de manera muy preocupante y peligrosa, en un lugar común.

Arequipa, a 19 de enero de 2024

JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisdom (Nigeria). Consultor jurídico. Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa). Doctorados en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima). Presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia (Perú). Autor, coautor, director y codirector de más de ciento veinte libros, en diversas ramas del Derecho, desde un enfoque de derechos fundamentales e interdisciplinario, publicados en 15 países. Codirector de los Códigos Penales Comentados de Ecuador, Colombia, Chile y Panamá.

ANISTIA REDUZIDA, ESPECÍFICA E RESTRITA: A IMPORTÂNCIA DA CONTESTAÇÃO DA LEI DA ANISTIA PARA A MEMÓRIA BRASILEIRA

REDUCED, SPECIFIC AND RESTRICTED AMNESTY: THE IMPORTANCE OF CONTESTING THE AMNESTY LAW FOR BRAZILIAN MEMORY

Bernardo Ortolani Moreira

Resumo

O presente estudo aborda a importância da procedência da ADPF 320 para as políticas de memória brasileiras, a partir das análises do processo de criação da Lei da Anistia, da decisão do STF que a considerou constitucional e do caso Gomes Lund e Outros VS. Brasil, que negou essa constitucionalidade. Após as análises, conclui-se a necessidade de revisão da Lei da Anistia frente às crescentes ameaças ao Estado Democrático de Direito brasileiro nos últimos anos, incentivadas tanto pela ineficiência das políticas de memória brasileiras, quanto pela sensação de impunidade desse tipo de atentado, ambas afetadas pela forma atual da lei.

Palavras-chave: Lei da anistia, Ditadura militar brasileira, Supremo tribunal federal, Corte interamericana de direitos humanos, Políticas de memória

Abstract/Resumen/Résumé

The present study addresses the importance of granting ADPF 320 for Brazilian memory policies, by analyzing the legislative process for the creation of the Amnesty Law, the Brazilian Supreme Court's decision considering it constitutional, as well as Lund and Others VS. Brazil case, which rejected its constitutionality. The analysis concludes that it is essential to revise this law in the face of the growing threats to the Rule of Law in recent years, encouraged both by the inefficiency of Brazilian memory policies and by the feeling of impunity for this type of attack, both affected by the legislation's current form.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Amnesty law, Brazilian military dictatorship, Brazilian supreme court, Inter-american court of human rights, Memory policies

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em maio de 2014 foi protocolada a ADPF 320, questionando a decisão do STF sobre a constitucionalidade da Lei nº 6.683 de 1979, a Lei da Anistia, após uma decisão de 2010 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esta pesquisa baseia-se no reconhecimento da importância da procedência dessa ADPF a partir da análise do contexto de criação da Lei da Anistia, da decisão do STF que a considerou constitucional e do caso Gomes Lund VS. Brasil. A necessidade de revisão da Lei da Anistia manifesta-se em face das crescentes ameaças ao Estado Democrático de Direito enfrentadas pelo Brasil nos últimos anos, perpetuadas tanto pela sensação de impunidade, quanto pela baixa eficácia das políticas de memória do período ditatorial, prejudicadas pelo processo de anistia (PSOL, 2014; Brasil, 1979; OEA, 2010).

A história da maior parte dos países da América do Sul na segunda metade do século XX foi marcada pela brutalidade dos crimes contra a humanidade cometidos por seus regimes militares. Com o fim dessas ditaduras, a maior parte desses países buscou dar justiça para as vítimas dos regimes, de modo que apenas Chile e Brasil consideraram constitucional a autoanistia feita pelos militares, no caso brasileiro por meio da ADPF 153 (Brasil, 2010). A aprovação dessa ADPF, todavia, conflitou com os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, em especial com a Convenção Americana de Direitos Humanos.

Confirmando essa contradição, em 2010 a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou a Lei da Anistia inconstitucional. No caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) VS. Brasil, a corte compreendeu que a Lei da Anistia impedia a investigação de violações graves aos direitos humanos, que são protegidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que é ratificada pelo Brasil. Em face dessa decisão, houve a protocolização da ADPF 320 em 2014, porém, quase 10 anos depois, ainda não houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal (OEA, 2010; PSOL, 2014).

No tocante à metodologia da pesquisa, o presente resumo expandido utilizou, com base na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), a vertente metodológica jurídico-social. Com relação ao tipo genérico de pesquisa, foi escolhido o tipo jurídico-projetivo. Por sua vez, o raciocínio desenvolvido na pesquisa foi predominantemente dialético. Quanto ao gênero de pesquisa, adotou-se a pesquisa teórica-bibliográfica.

2. A LEI DA ANISTIA E SUA INFLUÊNCIA NA MEMÓRIA

Em primeiro de abril de 1964 ocorreu no Brasil o golpe militar, que derrubou o então presidente João Goulart, com o apoio de alguns setores da sociedade e de forças externas. A ditadura militar foi um período violento na história brasileira, não somente pelo fim da democracia de fato, mas também pela completa destruição do Estado Democrático de Direito. Durante os 21 anos do regime a censura, o assassinato de opositores, as torturas e os desaparecimentos forçados tornaram-se a política do regime (Gaspari, 2002).

Com o passar dos anos a popularidade do regime começou a cair, apesar da máquina de propaganda estatal e da censura. As constantes violações aos direitos humanos levaram ao fortalecimento da oposição, cada vez mais vocal, culminando na demanda por uma anistia “ampla, geral e irrestrita”. Tornou-se claro para o Governo que o regime não seria capaz de resistir por muito tempo, contudo bastava que ele resistisse por tempo suficiente para que as lideranças do regime fossem anistiadas por seus crimes (Fico, 2010).

Em 1974 o presidente Ernesto Geisel anunciou o início da redemocratização brasileira, prometendo uma “lenta, gradual e segura” abertura política (Westin, 2019). Em 28/06/1979, uma das mais importantes peças dessa abertura, o PL 14/1979, que viria a se tornar a Lei da Anistia, é encaminhado para o congresso pelo presidente Figueiredo. Após 67 dias, é sancionada a lei nº 6.683 de 28 de agosto de 1979¹.

Nos Arquivos do Senado a história da anistia brasileira é contada como uma junção do medo de punição dos militares e o anseio por liberdade das famílias dos presos políticos (Westin, 2019). Para o historiador Carlos Fico, entretanto, o objetivo do texto da lei 6.683/79 e das demais medidas democratizantes da ditadura era o de garantir maior controle sobre o inevitável o fim do regime. O parágrafo segundo dessa lei, dessa maneira, visava dividir as críticas ao projeto, criando dois blocos de resistência para dividir e enfraquecer a oposição: aqueles que estavam mais preocupados com a libertação dos presos políticos e aqueles que estavam mais preocupados com a punição dos torturadores (Fico, 2010).

Com a divisão entre qual reivindicação seria mais importante, o texto acabou sendo aprovado sem alterações e a anistia passou a ser vista como a única possível naquele momento,

¹ Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares.

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política.

§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.

e não a desejada pela oposição (Schinke, 2009). Concluído o objetivo de garantir a aprovação da lei e, com isso, sua própria impunidade, nos meses seguintes o regime inocentou e libertou os demais presos políticos excluídos pelo texto (Westin, 2019). Desse modo, é visível que a anistia nunca foi uma proposta de “paz” entre as instituições militares e a sociedade civil, tampouco foi a libertação dos demais presos um reconhecimento dos erros do texto da lei; a anistia no Brasil foi acima de tudo uma salvaguarda para os membros do regime.

As consequências da Lei da Anistia são grandes, em especial no que diz respeito às ações de memória. As políticas brasileiras de memória sobre a ditadura são praticamente inexistentes, baseando-se na ideia de um esquecimento institucional, no apagamento da memória coletiva dos eventos traumáticos que vitimaram milhares e, acima de tudo, na destruição da história de resistência da população. A ideia de paz com o passado por meio do esquecimento, entretanto, não permite que essas feridas realmente se curem (Ansara, 2012).

Apesar disso, houve avanços na direção da justiça para as vítimas. A Lei nº 9.140/95 representou o primeiro passo na direção de um real reconhecimento dos horrores que ocorreram entre 1964 e 1985, já que o Estado brasileiro reconheceu sua culpa pelas mortes, torturas, desaparecimentos e demais crimes cometidos por seus agentes. Isso tornou possível algumas medidas reparatórias que não violam a Lei nº 6.683/79, como o pagamento de indenizações e a presunção de morte em caso de ausência para pessoas que desapareceram entre 1961 e 1988 (Brasil, 1995; Brasil, 1979).

Em 2002, a lei nº 10.559/2002 trouxe alterações tanto para a Lei da Anistia, quanto para a lei 9.140/95. O status de anistiado foi ampliado para englobar um número maior de vítimas, também houve um aumento das possibilidades de indenização, em especial para aqueles cujas atividades laborais foram impactadas de alguma maneira pela ditadura, além da criação da Comissão da Anistia, um importante passo para medidas de memória no Brasil. Essas tentativas de reparações econômicas e morais são extremamente importantes, contudo, a ausência de responsabilização no âmbito penal inevitavelmente amarga essas vitórias, já que os algozes dessas e de outras vítimas permanecem impunes pelos seus crimes (Brasil, 2002; Brasil, 1995).

3. AS CONTESTAÇÕES NO PERÍODO DEMOCRÁTICO

Em 1985 ocorre a primeira eleição livre no país desde o início da década de 60. Nesse florescer democrático, ocorre um dos marcos históricos mais importantes para o Brasil e para o direito brasileiro, a Constituição de 1988. Apelidada de Constituição Cidadã, o texto tem

como objetivo claro restaurar e preservar o Estado Democrático de Direito nacional, ampliando as noções de cidadania e promovendo o respeito aos direitos humanos (Brasil, 2023).

Com os dispositivos dessa nova Carta Magna, a questão da anistia passou a ter sua constitucionalidade questionável, pois ainda não havia sido examinada pelo STF. Em 2008, a Ordem dos Advogados do Brasil protocolou a Arguição de Descumprimento de Preceito Constitucional nº 153, que questionava a anistia dos agentes do Estado. Para a OAB o problema se localizava na relação entre o Art. 1º e seu § 1º. (Brasil, 2008).

No § 1º, é definido que a anistia será estendida a “crimes de qualquer natureza, relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política”. A OAB argumentou que os crimes realizados pelos torturadores não poderiam ser crimes políticos, já que a tortura é um crime comum. Consequentemente, os agentes do estado deveriam ser excluídos da anistia já que ela não é aplicável aos crimes cometidos por eles (Brasil, 2008).

Mesmo que houvesse um entendimento de que os crimes dos militares seriam políticos, ainda existiriam violações à preceitos constitucionais nessa lei. Na petição inicial, a OAB argumenta que há violação dos preceitos da isonomia em matéria de segurança, já que a anistia seria desproporcional. Para os opositores, seria válida apenas para “delitos de opinião, excluindo os crimes de violência”, enquanto para os opressores seriam protegidos crimes violentos contra a vida, liberdade e integridade pessoal (Brasil, 2008).

Há ainda críticas ao desrespeito aos preceitos fundamentais de não ocultar a verdade e a não violação do Estado Democrático de Direito. O Art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, dispõe claramente sobre o direito de todos os brasileiros de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo, algo impedido pela impossibilidade de investigar os crimes da ditadura. Além disso, uma lei de autoanistia e as subversões à democracia cometidas pela ditadura militar violariam o Estado Democrático de Direito. (Brasil, 2008; Brasil, 2023).

A decisão do Supremo sobre a arguição da OAB, por sete votos a dois, foi considerá-la improcedente. Para o ministro Cezar Peluso, a Lei da Anistia não pode ser entendida como uma autoanistia por ter sido acordada entre os militares e o poder Legislativo, além de criticar a percebida mudança do posicionamento da ordem. Em resposta à violação dos preceitos, Peluso defendeu que a anistia respeita a isonomia por afetar também os militares e negou o argumento de obscuridade no texto da norma (Brasil, 2010).

Posteriormente à ADPF 153, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o Brasil e chegou a um resultado oposto. Em 1967, cerca de 60 membros do Partido Comunista do Brasil (PcdoB) estabeleceram uma guerrilha às margens do rio Araguaia, na região do Bico

do Papagaio, no Tocantins, próximo à divisa com o Maranhão e o Pará. Entre 1972 e 1974, as forças militares iniciaram suas operações de extermínio contra o grupo armado (Gaspari, 2002), que incluíram, até mesmo, a destruição de dedos e arcadas dentárias para impedir a identificação dos corpos (Arruda, 2014).

A partir desse contexto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2009, entrou com uma ação contra o governo brasileiro pelo desaparecimento forçado dos guerrilheiros e de moradores da região. No caso Gomes Lund e Outros (“Guerrilha do Araguaia”) X Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condena o Brasil, em 2010, sendo de especial relevância os pontos resolutivos 3 e 5:

3. As disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil. (OEA, 2010)

5. O Estado descumpriu a obrigação de adequar seu direito interno à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, contida em seu artigo 2, em relação aos artigos 8.1, 25 e 1.1 do mesmo instrumento, como consequência da interpretação e aplicação que foi dada à Lei de Anistia a respeito de graves violações de direitos humanos. Da 114 mesma maneira, o Estado é responsável pela violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial previstos nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação aos artigos 1.1 e 2 desse instrumento, pela falta de investigação dos fatos do presente caso, bem como pela falta de julgamento e sanção dos responsáveis, em prejuízo dos familiares das pessoas desaparecidas e da pessoa executada, indicados nos parágrafos 180 e 181 da presente Sentença, nos termos dos parágrafos 137 a 182 da mesma. (OEA, 2010)

Com base nessa decisão, em maio de 2014 o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) protocolou a ADPF 320 (PSOL, 2014). Sendo o Brasil signatário da CIDH, e baseando-se na violação dos preceitos constitucionais e convencionais apontados pela decisão da Corte IDH, a ação pede uma revisão da Lei da Anistia. Até o momento, não houve decisão pelo Supremo Tribunal Federal e o caso segue em trâmite a época de escrita desse artigo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o fim da ditadura, o Brasil tornou-se o país na América do Sul que menos puniu membros de seu regime militar após a redemocratização. Apesar de medidas importantes, como a Comissão da Anistia (2001) e a Comissão Nacional da Verdade (2011), essas são

insuficientes, em si só, para garantir justiça e preservar a memória dos que lutaram pela liberdade.

Para além disso, a Lei da Anistia corrobora para a promoção de uma sensação de impunidade (e mesmo inocência) da classe militar frente às violências estatais durante a ditadura. O perigo dessa percepção associa-se ao crescimento da extrema direita nos últimos anos, e preocupa, em especial, após os atos de 08/01/2023. Com a ausência de responsabilização penal as políticas de memória brasileira são forçadas a enfrentar um fato inegável: mesmo após todas as denúncias, nenhum torturador ou assassino parte do Estado foi punido. Assim, atentar contra o Estado Democrático de Direito brasileiro é socialmente lido como menos “perigoso”.

O medo das forças do Estado, em especial por grupos minoritários, não é recente, porém perpetua-se com essa sensação de impunidade. As ações violentas das Forças Armadas e da Polícia, bem como técnicas de repressão estatal utilizadas durante a ditadura permanecem vivas - seja por meio das chacinas em favelas, seja através dos atentados ao Estado de Direito.

O episódio de 08 de janeiro marca, na história brasileira, um dia de resistência da democracia. Apesar disso, sabe-se ter sido a falta de interesse de membros do alto escalão das Forças Armadas, e a ausência de interesses internacionais (ao contrário da Operação Condor) um dos principais motivos para tal sobrevivência.

Assim, uma vez que o Estado Brasileiro não pode colocar a sua democracia nas mãos de circunstâncias favoráveis, é que se compreende a importância da procedência da ADPF 320 para a criação de políticas de memória sobre a ditadura efetivas. É essencial que os crimes do regime sejam investigados, expostos e punidos, tanto para reforçar os perigos e a violência do autoritarismo, quanto para melhor proteger o Estado Democrático de Direito.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANSARA, Soraia. **Memória Política da Ditadura Militar e Repressão no Brasil: Uma Abordagem Psicopolítica**. 2005. Tese (Doutorado em Psicologia Social), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: São Paulo. 2005.

ARRUDA, Roldão. Corpos do Araguaia “sumiram” diz coronel. **Estadão**, 2014. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/politica/eleicoes/corpos-do-araguaia-sumiram-diz-coronel-imp/>. Acesso em: 23 de out. de 2023.

BRASIL. **Lei nº 6.683 de 28 de agosto de 1979**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6683.htm. Acesso em: 22 de out. de 2023

BRASIL. **Lei nº 9.140 de 04 de dezembro de 1995**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9140.htm#:~:text=LEI%20N%209.140%2C%20DE%2004%20DE%20

DEZEMBRO%20DE%201995.&text=Reconhece%20como%20mortas%20pessoas%20desaparecidas,1979%2C%20e%20dá%20outras%20providências. Acesso em: 22 de out. de 2023.

BRASIL. **Lei nº 10.559 de 13 de novembro de 2002**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110559.htm Acesso em: 22 de out. de 2023.

BRASIL, Conselho Federal da OAB. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153**. 2008. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=330654>. Acesso em: 22 de out. de 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153**. Brasília, 22 de out. de 2010. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612960>. Acesso em: 22 de out. de 2023.

BRASIL. **Notícias STF**. STF é contra revisão da Lei da Anistia por sete votos a dois, 2010. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=125515>. Acesso em: 23 de out. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, 2023. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf>. Acesso em: 22 de out. de 2023.

FICO, Carlos. A Negociação Parlamentar da Anistia de 1979 e o Chamado “Perdão aos Torturadores”. **Revista Anistia**, Brasília, n. 4, p. 318-333, jul/dez 2010. Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30005.pdf>. Acesso em: 20 de out. de 2023.

GASPARI, Elio. **As Ilusões Armadas**. A Ditadura Escancarada. 2a. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

GUSTIN, Miracy B. de S.; DIAS, M. T. F.; NICÁCIO, C. S. **(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática**. 5a. ed. São Paulo: Almedina, 2020.

OEA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. **Gomes Lund e Outros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil**. Sentença de 24 de novembro de 2010. Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gomes171014por.pdf>. Acesso em: 20 de out. de 2023.

PSOL. **Petição Inicial da ADPF 320**. Supremo Tribunal Federal, 05 mai. 2014. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4574695>. Acesso em: 20 de out. de 2023.

SCHINKE, Vanessa Dorneles. **Os Indícios do Discurso do Esquecimento: a anistia de 1979 à luz da teoria do direito e da democracia**. Revista da Faculdade de Direito da UFG v. 33 n. 1, 2009.

WESTIN, Ricardo. Há 40 anos, Lei da Anistia preparou caminho para fim da ditadura. **Agência Senado**, 2019. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ha-40-anos-lei-de-anistia-preparou-caminho-para-fim-da-ditadura>. Acesso em 22 de out. de 2023.